

CONSTANCIA: A despacho del señor Juez, el proceso, a fin de proveer sobre el recurso de reposición, interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada. Igualmente se hace constar, que el titular de este recinto judicial, fue designado para integrar la comisión escrutadora mediante Resolución No.026 de esta ciudad, para las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022, desde el día 14 al 17 de marzo del año en curso. Así mismo, se hace constar que, durante los días comprendidos entre el 09 al 17 de abril de 2022, no corrieron los términos judiciales, en razón a la Semana Santa. Santiago de Cali, 10 de mayo de 2022.

ANGELA MARIA LIBREROS TORRES.
SECRETARIA.

AUTO INTERLOCUTORIO No.334 PRIMERA INSTANCIA.
JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD.
SANTIAGO DE CALI, DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS.
RAD.10-2021-00577-00.

OBJETO DE LA DECISIÓN:

Ha pasado al Despacho el presente proceso DECLARATIVO DE RESOLUCION DE CONTRATO, instaurado por el señor: ANDRÉS OCAMPO GUAICHAR, quien actúa a través de apoderada judicial, contra: AFIANZADORA NACIONAL S. A., debidamente representada, a fin de resolver el recurso de REPOSICIÓN, formulado por el apoderado judicial del extremo pasivo, contra el auto que declaró la ilegalidad de todo lo actuado a partir del auto No.785 del quince (15) de septiembre del año 2021 y admitió la demanda y el Auto Interlocutorio No.117 de 18 de febrero de 2022, por las razones allí expuestas.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

En síntesis, fundamenta el recurso el memorialista, señalando:

i) que el despacho advierte que, a su juicio existe una ilegalidad en la actuación al señalar en su admisión que era un proceso verbal sumario por ser de mínima cuantía y realmente es un proceso verbal por ser de menor cuantía, ii) que de manera confusa, afianza debe tener en cuenta la ilegalidad decretada y que se agrega una consignación de \$35.364.000 que hizo afianza, iii) es la misma ley la que señala las consecuencias cuando el acto ilegal es saneado por las partes y no causó ningún perjuicio. así lo señala claramente el artículo 136 del código general del proceso, iv) que además y es lo que parece que no se ajusta a la realidad actual del proceso verbal, durante la audiencia inicial y de instrucción y juzgamiento y en el momento del control de legalidad se podía advertir este punto y aclararlo, v) que no está bien que el Juez, acudiendo al “antiprocesalismo” decida decretar una ilegalidad para volver a empezar el proceso y olvidar todo lo que se ha avanzado, vi) que referente a la caución que habla el Art.590 del C.G.P., solicitó al despacho fijar un monto de caución que está dispuesto a prestarla para, reitera, impedir que se decrete la cautela y que para demostrar ese deseo de impedir el decreto de las cautelas procedió a aportar póliza de seguros mundial -antes que el despacho decretara las cautelas o fijara el monto- por la suma de \$50.519.984. por lo tanto, no es cierto que se hizo un deposito por \$35.364.000 a órdenes del Juzgado. Lo que hizo fue prestar una caución por la suma de \$50.519.984, para impedir la medida cautelar.

TRAMITE PROCESAL:

La parte pasiva, manifestó que de conformidad al Art.9° Parágrafo del Decreto 806 de 2020, envió por correo electrónico el día 22 de febrero de 2022, el escrito del recurso.

La parte actora no se pronunció frente al recurso de reposición interpuesto.

Procede el despacho a resolver, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

El recurso de reposición tiene como finalidad que el mismo Juez que profiere determinada decisión la revoque o reforme, atendiendo los argumentos que esgrima el recurrente o persona inconforme con la decisión adoptada por el Juzgado.

En el presente caso, el recurrente indica en primer término que, se advirtió una ilegalidad en la actuación al señalar en su admisión que era un proceso verbal sumario por ser de mínima cuantía y realmente es un proceso verbal por ser de menor cuantía sin considerar lo previsto en el Art.136 del C.G.P.

Al respecto tenemos que, esta Agencia Judicial, en observancia de la normas procesales, conforme a lo previsto en el art.13 del C.G.P., procedió a la revisión de la demanda que hoy llama la atención, pues una vez cumplidas las etapas procesales, al hacer un control de legalidad con fundamento en el artículo 132 y el numeral 12° del artículo 42 del C.G.P., se observó que las pretensiones al ascender al monto de: CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$50.519.984.00) M/cte., se tenía que, se trata de un trámite: VERBAL y no VERBAL SUMARIO, como se había ordenado, por lo que ese sería el hilo procesal a seguir.

En primer lugar, es menester señalar que el legislador estableció como mecanismo de control de la demanda, un catálogo de requisitos formales que toda petición de esa estirpe debe contener para acceder a la administración de justicia, máxime cuando se actúa por intermedio de un profesional del derecho, requisitos que deben cumplirse para que proceda su admisión.

En esa tónica, es preciso indicar que, el objeto de los procedimientos, no es nada más ni nada menos, que la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, garantizándose el debido proceso, por consiguiente, al establecerse parámetros y/o exigencias que debe reunir toda demanda, a fin de que la misma se ajuste al ritual pertinente, acarrea una revisión detenida de esta (control de legalidad), para que así, no se presenten futuros inconvenientes al respecto, siendo necesario avizorar las falencias correspondientes, para lograr el goce real del derecho material, es decir que, el derecho procesal es el instrumento necesario para hacer eficaz el derecho sustancial.

Así mismo, Sobre la legalidad de los autos ha dicho la Corte Suprema de Justicia: “... *que los autos aun en firmas no ligan al juzgador para proveer conforme a derecho, pudiendo por ende apartarse de ellos cuando quiera que lo resuelto no se acomodó a la estrictez del procedimiento. Así, por ejemplo, refiriéndose a estos autos expresó que “la corte no puede quedar obligada por su ejecutoria, pues los autos pronunciados con quebranto de normas legales no tienen fuerza de sentencia, ni virtud para constreñirla a asumir una competencia de que carece, cometiendo así un nuevo error” (auto de 4 de febrero de 1.981; en el mismo sentido, sent. De 23 de marzo de 1.981., pág. 2; XC, pág. 330)*”. Tomado de la Gaceta Judicial de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, segundo semestre de 1.988, tomo CXCI número 2431, pág. 243.

Ahora bien, en cuanto se refiere a la caución que habla el Art.590 del C.G.P., donde indica que no es cierto que se hizo un depósito por \$35.364.000, a órdenes del Juzgado, que lo que hizo fue prestar una caución por la suma de \$50.519.984, para impedir la medida cautelar.

Al respecto es menester indicarle y aclararle al profesional del derecho que debía atemperarse a lo dispuesto en el proveído No.116 del 18 de febrero de 2022, en virtud a que fue realizado un control de legalidad, con fundamento en el artículo 132 y el numeral 12° del artículo 42 del C.G.P., y que así una vez, la parte demandante cumpliera con lo dispuesto en dicha providencia, se procedería a lo legalmente pertinente, esto es, a no decretar medida cautelar y fijar monto para prestar caución a fin de impedir la práctica de la misma, si es del caso, ello, de conformidad al Art.590 del C.G.P.

Así mismo, se indicó que se agregaba al plenario la consignación aportada por la parte demandada: AFIANZADORA NACIONAL S. A., por valor de: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (35'364.000,00) M/cte., para constar y ser tenida en cuenta en

su momento procesal oportuno, pues de los anexos presentados se avizoraba dicha suma así y no por la suma de \$50.519.984.

CONSEJO NACIONAL DE FIDUCIARIOS

Formulario de Registro de Fideicomiso

Fecha: 15/06/2008

Valor: \$ 38.364.000

Identificación: 900003370

Dirección: Calle 10 # 4-47 Piso 10 Ed. Corficolombiana

Ciudad: Cali

Teléfono: 4852500 CEL 3212014370

Fax: 0

Correo electrónico: financiero@afiansa.com

Valor inicial de la inversión: \$ 38.364.000

Sujeto a Retención: SI (X) NO ()

Residente: SI (X) NO ()

AFIANZADORA NACIONAL S.A.

Identificación: 900003370

Actividad Económica: CIIU: Afianzador

Dirección: Calle 10 # 4-47 Piso 10 Ed. Corficolombiana

Ciudad: Cali

Teléfono: 4852500 CEL 3212014370

Fax: 0

Correo electrónico: financiero@afiansa.com

Valor inicial de la inversión: \$ 38.364.000

Sujeto a Retención: SI (X) NO ()

Residente: SI (X) NO ()

Así las cosas, debe decirse que, en cada decisión judicial proferida en el caso, no se vislumbra un exceso ritual manifiesto, donde se demuestre la inobservancia del derecho sustancial, el cual se determina por “...*el contenido, la materia, la sustancia, esto es, la finalidad de la actividad o función jurisdiccional...*”, por lo tanto, el derecho procesal, es: “...*un freno eficaz contra la arbitrariedad. Yerra, en consecuencia, quien pretenda que en un Estado de derecho se puede administrar justicia **con olvido de las formas procesales**. Pretensión que sólo tendría cabida en un concepto paternalista de la organización social, incompatible con el Estado de derecho...*” (Parte en negrilla fuera del texto original).

En compendio, al encontrarse que, en efecto, la demanda debe seguir un trámite: VERBAL, ese será el hilo procesal a seguir, por lo que el recurso interpuesto no tiene vocación de prosperidad, pues lo pretendido y/o el trámite debe gozar de claridad al respecto, para así garantizar el derecho sustancial y el debido proceso.

Conforme a las anteriores consideraciones, el Juzgado Décimo Civil Municipal de Oralidad de Santiago de Cali,

RESUELVE:

NO REVOCAR el Auto Interlocutorio No.116 del 18 de febrero de 2022 y el Auto Interlocutorio No.117 del 18 de febrero de 2022, notificados por estado el 21 de febrero de 2022, por los motivos expuestos en este auto.

NOTIFÍQUESE.

EL JUEZ,

VICTOR GUILLERMO CONDE TAMAYO.

3.-

FECHA:12 DE MAYO DE 2022

ESTADO No: 081

Firmado Por:

Victor Guillermo Conde Tamayo
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 010 Oral
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

¹ Corte Constitucional - Sentencia No. C-029/95.

DEMANDANTE: ANDRÉS OCAMPO GUAICHAR.
DEMANDADO: AFIANZADORA NACIONAL S. A.

Código de verificación:

06f0071cbea7b74b6cb05d1dcc0c0fbfa0079404e50f5679156e09da22ab7565

Documento generado en 10/05/2022 05:29:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>